

ACCIÓN URGENTE

JUICIO CONTRA INDÍGENAS WICHÍ SIGUE PENDIENTE

Pese a que se suspendió el inicio del juicio oral previsto para el 20 de marzo contra tres miembros de la comunidad indígena wichí Chañaral por defender su territorio, el proceso judicial que vulnera su derecho de defensa y acceso a la justicia continúa abierto.

Martín Acosta, Dalmacio Acosta y Demetrio Campos, tres miembros de la **comunidad wichí Chañaral** de la Provincia de Salta, al norte de Argentina, siguen enfrentando un juicio por defender su territorio que no cumple con las garantías del debido proceso. Se trata de una acusación penal contra los tres defensores indígenas por amenazas y daños iniciada por un hacendado que pretende ocupar el territorio que tradicionalmente ocupa la comunidad, por un hecho ocurrido en el 2014, en el cual los indígenas se opusieron a que un grupo de individuos alambraran parte del territorio ancestral e impedirían el paso a sus lugares de caza, pesca, agua y leña, poniendo en riesgo su subsistencia.

Desde que se realizó la denuncia en su contra, y se les asignó defensa pública, los indígenas manifiestan que el abogado defensor nunca se comunicó con ellos ni brindó asesoramiento legal, tampoco les comunicó sobre las acusaciones en su contra, aun teniendo conocimiento de ellas. Adicionalmente, ellos cuentan que ningún acto del proceso ha sido traducido a la lengua indígena –wichí– lo cual imposibilita el ejercicio de su defensa. Por lo tanto, se enfrentan a un proceso sin haber tenido una defensa efectiva y con el riesgo de ser condenados penalmente por dichos actos.

Su abogado defensor presentó ante el Tribunal de Orán de la Provincia de Salta un pedido de nulidad de todo el proceso al haberse violado el derecho de defensa de los acusados. Pese a que el 17 de marzo la Sala I del Tribunal ordenó la suspensión del juicio oral fijado para el 20 de marzo al no poder garantizarse el derecho a defensa, aún no se ha resuelto la nulidad de todo el proceso judicial a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia de los tres acusados.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- Instando que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, y en especial el derecho de defensa de Martín Acosta, Dalmacio Acosta y Demetrio Campos;
- Pidiendo que se brinde una solución de fondo al reclamo territorial de la comunidad wichí Chañaral y se titule la propiedad colectiva sobre su territorio.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 DE MAYO DE 2017 A:

Gobernador de la Provincia de Salta

Juan Manuel Urtubey
Av. Los Incas s/n, Centro Cívico Grand
Bourg, Provincia de Salta, Argentina
Fax. +54 0387 - 4324000
Correo-e: jmurtubey@salta.gov.ar
Twitter: @UrtubeyJM

Tratamiento: Sr. Gobernador

Ministerio Público de la Provincia de Salta

Dr. Pablo López Viñals
Av. Bolivia 4671 (Ciudad Judicial), Provincia
de Salta, Argentina
Tel/Fax: +54 0387- 4258000 / 4258400
Correo-e: pablolopezv@mpublico.gov.ar

Fiscalía Penal de Pichanal

Dra. Mónica Viazzi
Tucumán y Pucará (terminal de ómnibus de
Pichanal), Pichanal, Pcia de Salta, Argentina
Tel/Fax: +54 03878-493842
Correo-e: mviazzi@mpublico.gov.ar

Y copias a:

Amnistía Internacional Argentina
Email: activismo@amnistia.org.ar

Secretaría de Derechos Humanos y

Pluralismo Cultural de la Nación

Sr. Claudio Avruj
Correo-e: privadadh@derhuman.jus.gov.ar

Envíen también copia a la representación diplomática de Argentina acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU 58/17. Más información: www.amnesty.org/es/documents/amr13/5874/2017/es/

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**



ACCIÓN URGENTE

JUICIO CONTRA INDÍGENAS WICHÍ SIGUE PENDIENTE

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La comunidad del pueblo wichí, el Chañaral, de la Provincia de Salta, viene resistiendo el avance del sector privado sobre su territorio. En el año 2013 y 2014 denunció en reiteradas oportunidades el inicio de alambrados y trabajos de cerramiento en territorio ancestral. Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido información de avances en ninguna de estas denuncias.

En 2006 el Estado Nacional sancionó la ley 26.160, que ordena la suspensión de desalojos de comunidades indígenas y encarga al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización de un relevamiento territorial sobre la situación jurídica de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Sin embargo, a la fecha, sus sucesivas prórrogas, dilaciones y arbitrariedades han derivado en un alto nivel de incumplimiento de la norma. Sobre la comunidad el Chañaral se ha iniciado el relevamiento territorial pero a la fecha no se ha concluido y la comunidad no cuenta aún con el título de propiedad colectiva.

En 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, a través de sus Observaciones Finales, manifestó con preocupación que “a pesar del marco legal que reconoce el derecho de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, el Estado [Argentino] no garantiza todavía el pleno disfrute y ejercicio efectivo de este derecho. La ley 26.160 dispone el relevamiento o demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas con el objetivo de una regularización de las mismas, sin embargo: a) su ejecución ha sufrido complicaciones y demoras; b) solo se ha logrado concluir el proceso en 6 provincias, e incluso en los lugares donde el proceso ha concluido, los resultados del mismo no se han traducido en un reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria”.

En 2012, tras su visita a Argentina, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas llamó la atención sobre el uso del derecho penal para criminalizar actos vinculados a protestas de pueblos originarios para resistir desalojos y reivindicar sus legítimos derechos, y exhortó al Estado a buscar soluciones que permitan la compatibilidad entre los fines de orden público y el respeto a las normas internacionales de derechos humanos.

Nombre: Martín Acosta (h), Dalmacio Acosta (h), Demetrio Campos (h) y otros miembros de la comunidad indígena wichí Chañaral
Sexo: todos y todas

Más información sobre AU: 58/17 Índice AI: AMR 13/5978/2017 Fecha de emisión: 27 de marzo de 2017